

89

B O R R A D O R

CHILE

EL CAMBIO LLAMA A LA PUERTA

Carlos Cruz L.

1642 04

Originalmente "económica", la virulenta crisis que azota a Chile desde el segundo semestre de 1981, ha derivado definitivamente en "política".

La caída acumulada de más de un 20 por ciento en el PGB, un desempleo real que según el nuevo ministro de Hacienda remonta a un 30 por ciento de la fuerza de trabajo, y un deterioro de más de un 40 por ciento en el poder adquisitivo real de los salarios expresan efectivamente, en el área económica, la más grave situación porque haya transitado el país desde los tempranos años '30.

A partir de ese cuadro, no obstante, el fenómeno de la Protesta Nacional, activado inicialmente por el Comando Nacional de Trabajadores, en mayo de 1983 —y repetido mensualmente hasta noviembre— terminó por construir una fisonomía política a la crisis. Al amparo de una creciente movilización social, extendida a toda la geografía del país, la actividad política, proscrita por el régimen de Pinochet hace una década, ha desbordado masivamente los temores de la represión.

Fragmentada básicamente en dos grandes bloques partidarios —la Alianza Democrática y el Movimiento Democrático Popular—, la oposición política ha avanzado (desde "fuera del sistema") sus demandas por una renuncia de Pinochet, y la designación a la brevedad de un Gobierno provisional que conduzca al país, en un plazo de 18 meses, hacia la plenitud democrática "que conocimos". Pero el régimen, acosado en varios frentes, cuenta aún con la fuerza para coronar, eventualmente, sus intenciones de prolongarse hasta 1989.

En ese contexto, la crisis económica y la crisis política, manifiestan una relación "cautiva", y no se explican la una sin la otra...

Para efectos de comprensión, no obstante, el presente trabajo divide los dos planos. Una primera parte —la "política"— describe sumariamente la naturaleza del problema del poder en el Chile de estos días. La segunda —la "económica"—, realiza la secuencia de una crisis que, administrada ya por cinco gabinetes, ha conducido desde un modelo de monetarismo a ultranza a un pragmatismo keynesiano conservador, sin que las cosas hayan cambiado sustancialmente...

Polftica.

EL AUTORITARISMO EN JAQUE

Aunque ha logrado sostenerse en pie por más de diez años —configurando todo un récord en la Historia independiente del país—, el régimen militar de Augusto Pinochet está siendo obligado a revisar, desde mediados del año pasado, su primitiva vocación mesiánica. Desafiado masivamente por la Protesta Civil, y en brazos de una brutal erosión económica que recién ahora empieza a revertirse, el Gobierno abandonó ostensiblemente en mayo del '83 su sarcástico proyecto "fundacional" de un nuevo Chile, "sin políticos y en plenitud económica", para abocarse a la tarea bastante más prosaica de retener el poder.

En el trance, que ha podido controlar por la fuerza, Pinochet ha tenido que sacrificar progresivamente algunas piezas claves de su primitivo arsenal. A principios de abril, sin ir más lejos, la fuerza de la crisis precipitó el despido de los "Chicago boys" de los timones de la economía. La decisión, que privó al Gobierno del equipo de asesores civiles que durante nueve años aportó la médula ideológica ultraliberal al discurso del oficialismo, subrayó el progresivo aislamiento que afecta al General.

No es un fenómeno gratuito. La caída de un 14,3 por ciento en el Producto de 1982, un desempleo que llegó a empinarse hasta el 30 por ciento de la fuerza de trabajo...y el estilo de autoritarismo desafiante con que el régimen cerró los ojos a la gestación de una crisis mayúscula, terminaron por configurar a comienzos del '83 un cóctel potencialmente explosivo... La primera Protesta Nacional, convocada el 11 de mayo de 1983 por el naciente Comando Nacional de Trabajadores —una organización multisindical disidente, vertebrada en torno a los mineros del cobre— expresó ruidosamente la masividad del descontento y... terminó por insinuar una fisonomía política a una crisis que hasta entonces aparecía confinada a los territorios de la economía.

—El régimen, que justificaba su permanencia en el poder, y la persistente restricción de las libertades y los derechos humanos en función de su orden y de su éxito económico, se ha quedado sin nada que mostrar —comentó, por esos días,

Manuel Sanhueza, presidente del "Grupo de los 24", una organización de constitucionalistas disidentes.

A la sombra de las protestas, repetidas mensualmente entre mayo y noviembre, la actividad política —proscrita por Pinochet a escasos meses de su Golpe de Estado, una década antes— se multiplicó hasta el asombro. Hacia fines de agosto, la Alianza Democrática, constituida por la Derecha Republicana, la Social Democracia, una fracción del Partido Socialista y la Democracia Cristiana (la fuerza eje de la política chilena hasta 1973), se articuló como la primera y la principal de las corrientes políticas de alternativa al régimen militar.

Convergentes en la Protesta, esa fuerza, y el más reciente Movimiento Democrático Popular, liderado por el beligerante Partido Comunista (con la adhesión de otra fracción del Partido Socialista y del más radicalizado Movimiento de Izquierda Revolucionaria), han dado un rostro definitivamente político al inicialmente multiforme descontento civil.

Las demandas centrales de la Alianza Democrática (renuncia de Pinochet, Asamblea Constituyente y Gobierno Provisional, a la brevedad), constituyeron desde septiembre de 1983 la primera manifestación de desafío abierto al régimen.

Respuesta de reacción

Asediado por la crisis el Gobierno ensayó, desde la primera protesta ciudadana, tres tipos de respuestas de "reacción".

A diferencia de lo acontecido una década antes, la mera represión ilustró, entre junio y agosto, el fracaso del recurso de la fuerza. Inesperadamente "contestaria" a la brutalidad policial que se ensañó con los sectores más pobres de la periferia urbana, la civilidad en rebeldía obligó a una continua progresión de la violencia oficial que culminó, para la protesta de agosto, con la ocupación militar de las ciudades. Atrapada en sus casas por el toque de queda, la población del Gran Santiago respondió ^{con} ~~con~~ ^{vijilante} cacerolas al despliegue de 18 mil soldados, que produjeron 30 muertos "oficiales" durante esa jornada.

Los múltiples testimonios de una represión desproporcionada, la presión del Departamento de Estado norteamericano, y los esfuerzos de la jerarquía católica para contener la "espiral de la violencia", dieron bautismo de fuego a la designación de Sergio Onofre Jarpa, un ex político derechista, como ministro del Interior. Reputado por su versatilidad y su "capacidad de improvisación" Jarpa intentó y consiguió, hacia septiembre del '83, mediatizar políticamente la situación de crisis...

Llamada a dialogar por el Gobierno, la opositora Alianza Democrática legitimó su espacio como actor político en un escenario copado durante diez años por los militares. Pero en el trance, y en razón del fracaso absoluto de las conversaciones, sufrió su propia desmovilización.

Con un tiempo a su haber, Jarpa extremó entonces (y hasta la muy reciente crisis ministerial de fines de marzo), las contradicciones internas en el aparato del poder. A veces nítida; sorda a veces, su larga lucha por desbancar desde la conducción económica a los desprestigiados "Chicago boys" llenó, por meses, la conducta manifiestamente errática de un Gobierno en deterioro.

El desenlace, no obstante, presagiaba para los observadores el inicio del intento por mediatizar "ahora económicamente", una crisis que ha desgastado al extremo la plataforma civil de apoyo al régimen.

Los actores del drama

Aunque transita por la fase más agudamente débil de su historia de una década, el régimen militar de Pinochet está intentando, con alguna probabilidad de éxito, prolongar su vigencia hasta 1989. El calendario constitucional que el Gobierno hizo aprobar con un ⁶⁶/₂₅ por ciento del apoyo ciudadano en el Plebiscito de 1980 (objetado por la Iglesia Católica, y por la incipiente oposición política liderada en ese entonces por el ex Presidente Eduardo Frei), contempla para esa fecha la aprobación o el rechazo, por mayoría, de un candidato presidencial propuesto por el mismo Gobierno para Administrar el país hasta 1997.

Pese a que, acicateado por la crisis, Pinochet ha encargado a su Consejo de Estado la elaboración del conjunto de leyes "orgánicas constitucionales" que regularán la vida política del país en el futuro (de acuerdo a la Constitución militar), el estigma autoritario que pesa sobre los asesores de la Presidencia, y el propio carácter de la "democracia protegida" que ambiciona el régimen constituyen, por ahora, un muro insalvable para la construcción de un consenso.

El quiebre político nacional, manifiesto en la dinámica de la crisis es, con todo, muy anterior a su estallido. Parapetado en la Constitución de 1980, que otorgó a Pinochet un mandato "nominativo" para conducir el país hasta 1989 (y hasta 1997, si resulta ser el candidato del Gobierno), el régimen esgrime como fundamento central de su permanencia en el poder la "legitimidad de un pronunciamiento popular manifiestamente mayoritario". La oposición, que atribuye a ese plebiscito la calidad de "otro acto de fuerza", se autodefine en tanto como "fuera del sistema".

—Sobre la Constitución de 1980 no hay entendimiento posible, entre otras cosas, porque no conduce a la democracia —subraya el cientista político Genaro Arriagada, miembro del Comité político de la Democracia Cristiana—. Mientras el régimen construye la arquitectura de una institucionalidad que difícilmente sobrevivirá a su caída, la oposición asume su responsabilidad de situarse al margen.

El cuadro, que define una marcada polarización política en el país, señala la vigencia de una dramática impasse en torno al problema del poder.

Dueño hasta ahora de la probada "lealtad" del último Ejército prusiano del mundo, Pinochet está usando para el juego de su perpetuación los casi omnímodos poderes que le otorga el articulado transitorio de su Constitución, y la obsecuencia de una prensa mayoritariamente fiel al régimen, en razón de afinidades ideológicas o de pesados compromisos financieros con la banca estatal.

Vulnerable a la fuerza, la fragmentada oposición política ha logrado exten-

der, por toda la geografía del país, el pacifismo de sus protestas en masa, comprometiendo de paso a grupos medios corrientemente apáticos, como los comerciantes y los camioneros.

No se trata, con todo, de los únicos actores...

Abucheado por primera vez en la década, en un acto público que presidió a comienzos de marzo en la austral ciudad de Punta Arenas, Pinochet reaccionó culpando de las contramanifestaciones a la Iglesia Católica. El episodio, que coincidió en el tiempo con un prolongado problema diplomático con El Vaticano (y con una serie de denuncias del periodismo local sobre nepotismo y corrupción al interior del régimen), tensó otra vez las relaciones de distancia que han prevalecido, en estos años, entre la jerarquía eclesiástica y el poder militar... Esta vez, la acusación gubernamental no sólo erizó la piel del Episcopado sino, también, inquietó incluso a algunos "adherentes críticos" de la Administración uniformada.

—La crisis, que empezó siendo económica y derivó a la política, se ha transformado también en una cuestión moral —comentó Luis Valentín Ferrada, dirigente del Movimiento de Unión Nacional, uno de los 9 proto partidos en que se ha fragmentado la derecha originariamente adicta al régimen—. Cuando la fuerza espiritual de la Iglesia llega a poner en duda la "certeza moral", que es la fundamentación última de la legitimidad del Poder, la situación es ciertamente grave.

...Para el Gobierno. Y para sus ahora ex partidarios también.

Dispuesta a reconstruir el sitio histórico "que le corresponde por derecho propio" en el espectro político chileno, la derecha, que ha estado cortando las amarras que la ataban al régimen para enarbolar los estandartes de su independencia, es ahora víctima de una crisis de identidad. Tributaria, por un lado, de la Constitución Militar por la que se jugó en su hora, dice mantenerse fiel a los fundamentos de esa "decisión histórica". Pero —por el otro lado en fin— está

apelando hoy día a "los intereses superiores del país" para avanzar sus demandas por una "transición más rápida, aunque ordenada, hacia la democracia que todos conocimos". El discurso, que no va con Pinochet, ni con su ministro del Interior, atrapa a la derecha en un dilema neo-freudiano: indecisa entre el amor y el desamor, su comportamiento a la deriva confina al régimen a la sólo lealtad de los cuarteles.

Equilibrio de parálisis

La creciente polarización del país entre una sociedad civil y una sociedad militar pone en cuestión hoy día, con más fuerza que ayer, el problema de la perdurabilidad de Pinochet.

Aunque la dinámica de la crisis ha forzado al interior del Gobierno algunas trizaduras "impensables" hace sólo un año, el General todavía puede usar la fuerza para la prolongación de su experiencia en el poder. De configurarse esta hipótesis, los observadores prevén un recrudecimiento de la represión política institucional, y la masificación de un terrorismo punitivo de derecha a cargo de brigadas paramilitares que ya han hecho su aparición en la arena política. Del otro lado vaticinan, también, una aceleración del terrorismo opositor que ~~se~~ anota en su agenda reciente una serie de vistosos golpes de efecto.

En ese contexto, la Iglesia, los sectores medios de la población, y el Departamento de Estado norteamericano, temen que la crisis pueda derivar hacia una progresiva "salvadorización" del proceso político chileno; un temor que ha estado asfixiando y postergando —a falta de un horizonte mínimo de planeación— la toma de decisiones que involucran algún riesgo.

Puesto que expresa un equilibrio de "parálisis", la situación de impasse admite, en el terreno político, la posibilidad de un cambio más o menos próximo. La naturaleza del giro, y su gravitación sobre la estabilidad futura del país dependerán de la fuerza que precipite el "desempate", y de su capacidad para resolver el progresivo desencuentro nacional por la vía de un Diálogo o del enfrentamiento

civil.

—La geofísica enseña que la acumulación de gases en un sector interno de la tierra da origen a las erupciones volcánicas. Se sabe de su poder destructivo; perecen poblaciones enteras, y el territorio circundante hasta varios kilómetros se transforma en un incendiado desierto improductivo —profetizó, hace unos días, el presidente de la Corte Suprema, Rafael Retamal—. ...Las tensiones sociales estallan con resultados poblacionales y materiales semejantes...

Y es que, mientras la Iglesia Católica utiliza su influencia moral para invocar la necesidad perentoria de construir un consenso —con escasa receptividad gubernamental—, el clima político del país sigue siendo, en las palabras el ex parlamentario derechista, Germán Riesco, "propicio a los accidentes de la Historia".

Economía

...LA CRISIS SIGUE EN CASA

1.- Introducción

Por su profundidad y amplitud la crisis económica que está viviendo Chile, desde el tercer trimestre de 1981, no tiene parangón con ninguna otra fase de su historia reciente. Pese a la extraordinaria diversidad de las fórmulas políticas que han ejercido el poder en los últimos 50 años (cada una con su propia concepción del desarrollo), el país no conocía un deterioro tan general y tan rápido en sus principales variables económicas desde los tempranos años '30.

Aunque en una primera etapa el Gobierno militar se apresuró a explicar la situación como el sólo producto de la depresión mundial —que afectó al primer mundo tras la segunda crisis petrolera en 1980—, sus esfuerzos se estrellaron contra el escepticismo de la mayoría. La tesis de que la virulencia interna de la crisis es el producto combinado de la incapacidad de las autoridades para evaluar el momento y de la aplicación dogmática de esquemas de funcionamiento económico descartados por el mundo varias décadas antes, terminó por imponerse sin resistencias.

La principal manifestación de la crisis fue el considerable incremento del desempleo. Aunque la tendencia ha empezado a revertirse, la desocupación real se empinó, durante varios trimestres, a niveles superiores al 33 por ciento de la fuerza de trabajo, contabilizando el desempleo estadístico (20 por ciento), y el desempleo encubierto por los programas PEM y POJH, que diseñó el Gobierno a manera de subsidio a los cesantes (13 por ciento)... El incremento brutal de la desocupación fue acompañado por una inducida reducción de más de un 40 por ciento en los salarios reales. Este fenómeno, producto simultáneo de la derogación del sistema de reajustabilidad según inflación y de la devaluación del peso en un 120 por ciento, ha traducido serios problemas de subsistencia para los sectores más desprotegidos de la población.

Una segunda dimensión de la crisis es el voluminoso endeudamiento externo que presenta el país. Las obligaciones pendientes de Chile equivalen hoy a un

80 por ciento de su PGB, y a 4,5 veces sus exportaciones anuales. Trás la renegociación parcial de la deuda para los años 83/84, el país está destinando, sólo al pago de los intereses, aproximadamente un 40 por ciento de sus ingresos de exportación. De no haberse procedido a la postergación de las amortizaciones que correspondía cancelar en el bienio, el servicio de la deuda hubiese demandado más divisas de las que Chile es capaz de obtener por el total de sus ventas anuales de bienes y servicios al exterior. En relación al tamaño de su producto, la deuda chilena duplica la del Brasil, país frecuentemente citado entre los deudores más grandes del mundo.

La abundancia de recursos externos canalizados al país por el sistema financiero entre 1977 y 1981 (período en que la tasa anual de endeudamiento externo creció a un 57 por ciento), elevó considerablemente el nivel de endeudamiento de los agentes productivos en el interior. Mientras el nivel de actividad se expandió en un ³⁴20 por ciento, entre diciembre de 1978 y diciembre de 1981, el nivel de las ^{operaciones} colocaciones reales del sistema financiero aumentó en un 117 por ciento.

Quando el proceso recesivo se hizo presente, la desproporción entre la capacidad productiva de los agentes económicos y su nivel de endeudamiento precipitó un generalizado problema de insolvencia, que afectó gravemente al sistema financiero: la fuerte contracción de la demanda agregada generó una alta tasa de morosidad, al tiempo que las garantías reales, sobrepreciadas en el período de bonanza, se desvalorizaron raudamente...El riesgo del negocio financiero aumentó, del mismo modo en que el dinero se hizo escaso y caro...

El PGB disminuyó en forma ostentosa. La caída, superior al 20 por ciento entre el segundo trimestre de 1981 y el mismo período de 1983, resultó traumática para la estructura productiva y para el sector empresarial: la quiebra de más de 800 empresas en 1982 casi cuadruplicó los márgenes históricos... Durante el mismo lapso el producto industrial cayó en un 23 por ciento, la construcción en un 74 por ciento, el comercio en un 23 por ciento y el transporte

en un 10 por ciento. El deterioro del producto agrícola —un 6,8 por ciento en el período— fue dramático en el trigo, el principal de los cultivos tradicionales en el país: durante la temporada 82/83, la producción de 400 mil quintales representó sólo un tercio de los volúmenes cosechados una década antes.

Como contrapartida al deterioro general, sólo la minería y la pesca, actividades de relativa significación en el producto total, experimentaron un repunte, de un 6,8 y un 33 por ciento respectivamente.

2.- Las reacciones oficiales

A poco andar, la virulencia de la crisis demostró la tremenda fragilidad del esquema de "paridad fija y apertura indiscriminada", propiciado hasta entonces por la autoridad económica. Impulsado por el ministro Sergio de Castro, el proceso de "ajuste automático", por el que los sectores productivos debían adaptarse a las condiciones prevalecientes en la economía mundial —consiguiendo simultáneamente mayores recursos financieros— fracasó en toda la línea...

En lugar de reducir sus costos de producción a fin de generar excedentes que les permitieran responder a sus compromisos, los empresarios comprimieron su nivel de actividad, financiando sus déficits con mayor —y más caro— endeudamiento. Y la prevista reducción de los salarios fue reemplazada por los despidos en masa.

La autoridad no reaccionó a tiempo, entre otras cosas porque asignó a la crisis el carácter de una molestia transitoria. Los grupos afectados no pensaron lo mismo: mientras los empresarios, únicos interlocutores validados por el régimen, presionaban por la adopción de medidas correctivas, el ministro de Hacienda llegó a transformarse, en razón de su inflexibilidad, en una especie de "enemigo público número uno".

De Castro fue despedido en abril de 1982, y reemplazado por Sergio de la Cuadra, uno de sus más cercanos colaboradores. El nuevo equipo inició un proceso de gruesas transformaciones "de reacción", que finalmente tradujo una desarticulación del "modelo Chicago", responsable de una fase de prosperidad aparente muy

publicitada en el país y en el exterior. El "milagro chileno" significó, para sus artífices, un reconocimiento fervoroso hasta en Estados Unidos, donde se habló de "importar Chicago boys para dar solidez a la Reaganomics".

De la Cuadra tuvo que autorizar, en junio de 1982, una dramática devaluación del peso. Con ello, la paridad cambiaria fija, elevada a la categoría de "principio intransable" por el propio Pinochet, fue sacrificada a la necesidad de recuperar la solvencia externa del país, "fomentando las exportaciones y desincentivando las importaciones"... Aunque la medida afectó positivamente el funcionamiento interno de la economía, el alto nivel del endeudamiento externo de los agentes productivos (incitados a adquirir compromisos en dólares por las propias autoridades) abrió un nuevo frente de conflicto. La situación general empeoró, y el Gabinete fue despedido.

En reemplazo de De la Cuadra —y del ministro de Economía, general Luis Dagnés—, Pinochet designó entonces a Rolf Lüders, ex vicepresidente del "Grupo BHC", uno de los dos mayores conglomerados empresariales privados del país. Básicamente, su nominación tuvo por objeto entregar la conducción de la economía a "un empresario".

Inicialmente Lüders hizo, para todo el país, un descarnado análisis de la situación de crisis. Según dijo, dos tercios de su virulencia interna eran "responsabilidad de gruesos errores en la conducción doméstica". Su franqueza operó un giro en las expectativas de los empresarios, inquietos a esas alturas por el "potencial desestabilizador" que la crisis representaba para el proyecto político de Pinochet.

Con todo, Lüders inspiró un optimismo transitorio. Su estilo vacilante y su ejercicio de ceguera parcial ante los problemas de Balanza de Pagos que se incubaban para el corto plazo, desató a poco andar fuertes presiones especulativas que agravaron aún más la situación de los deudores en dólares y amenazaron con la quiebra a varios bancos.

Aunque en definitiva el Gobierno esquivó el golpe externo negociando un a-

cuerdo con el FMI, los términos del arreglo tradujeron gruesas limitaciones a la recuperación de una economía interna, atrapada entre la falta de divisas y su incapacidad para producirlas...

Días antes de la suscripción definitiva del acuerdo, el Gobierno decretó la "intervención" estatal de ocho instituciones financieras privadas, incluyendo entre ellas a las mayores del país, y a las más fuertemente endeudadas con el exterior. La medida incluyó una notificación a la banca acreedora externa, en el sentido de que el Gobierno garantizaba "el pago de los compromisos en la medida de lo posible", aunque los prestamistas internacionales tendrían que "hacer las pérdidas correspondientes a sus malos negocios".

El arreglo no gustó en el exterior. Al tiempo que el FMI postergaba hasta nuevo aviso la suscripción del acuerdo ya negociado, la banca extranjera suspendió "momentáneamente" todo nuevo crédito al país. Simultáneamente, la libertad cambiaria interna determinó, en sólo tres ^{meses} ~~meses~~, la pérdida de 800 millones de dólares en reservas... Sin alternativa, y contraviniendo las "seguridades" reiteradamente dadas a los chilenos, el Gobierno fue arrastrado a renegociar la deuda externa otorgando el aval del Estado a los compromisos pendientes del sector privado.

Trás haber demostrado la vulnerabilidad del país en sus relaciones financieras con el exterior, en febrero de 1983, Lúders abandonó el Gabinete, para desempeñarse como funcionario de Gobierno en la Fundación Chile. Posteriormente, y acusado de estafa, fue encarcelado con ^{una} ~~otra~~ constelación de otros altos ex ejecutivos bancarios.

Para reemplazar a Lúders, Pinochet recurrió al entonces presidente del Banco Central, Carlos Cáceres...

3.- La gestión Cáceres.

De apariencia austera y disciplinada, Cáceres se hizo cargo de la conducción económica en el momento de más profunda depresión. En ese escenario, recrudecían las presiones empresariales por reactivar la producción interna y por resolver

el drama del excesivo endeudamiento general. La banca acreedora exigía el cumplimiento de los compromisos contraídos, lo que obligaba a comprimir la actividad con el objeto de generar más excedentes. Los trabajadores, agrupados en el Naciente Comando Nacional de Trabajadores, ensayaban su poder de convocatoria para reivindicar, originalmente, objetivos como un mayor nivel de empleo y una recuperación real de los niveles de ingreso...

En ese ^{t/}contexto, Cáceres decidió trabajar en tres frentes: la renegociación parcial y acelerada de la deuda externa con vencimiento inminente, la búsqueda de una salida al endeudamiento interno, y la reactivación gradual del aparato productivo.

a. Renegociación de la deuda y Balanza de Pagos

En principio, la banca acreedora externa condicionó cualquier arreglo a la previa suscripción de un convenio "nacional" con el FMI. El cumplimiento de dicho acuerdo, consistente en una serie de metas cuantitativas para propiciar un ajuste en los desequilibrios macroeconómicos de la economía chilena, operaría como una "garantía" para la concesión de los nuevos recursos que el país precisara para no colapsar.

Cáceres logró hacer revisar el convenio adelantado por Lüders y suscribió un acuerdo sombra que, a partir de los excesos ya consumados, revirtiera lentamente la tendencia al "sobregiro". Pero, las metas finales no cambiaron: Chile no podría perder más de 600 millones de dólares de sus reservas, ni podría expandir el crédito interno más allá del 20 por ciento, ni podría excederse de un 2,3 por ciento del PCB en la magnitud de su déficit fiscal. Una vez que el FMI certificó la disposición del país a cumplir las exigencias formuladas, la banca acreedora accedió a prestar recursos frescos por 1.300 millones de dólares, y a renegociar —con aval del Estado—, las amortizaciones por casi 3.600 millones de dólares que el país debía pagar en el bienio 83/84.

Para financiar sus requerimientos de importación, y el sólo servicio de los intereses de su deuda externa, el país debió generar en 1983 un superávit de 1.000

millones de dólares en su balanza comercial. La consecución de esta meta obligó a definir una política cambiaria de "paridad real" (con cambio móvil, de acuerdo a la inflación interna), y a subir —primero transitoriamente; después en forma indefinida— desde un 10 a un 20 por ciento los derechos arancelarios.

En la medida en que, al amparo de la indiscriminada apertura al exterior pre-
valeciente en los años previos a la crisis el aparato productivo interno incre-
mentó su dependencia "estructural" en relación con las importaciones, el compro-
miso de un superávit de balanza comercial atentó contra sus posibilidades de
recuperación.

A fines de 1983 el programa suscrito con el FMI registraba un cumplimiento
"exitoso" en casi todas sus partes. Sólo el déficit fiscal excedió lo conveni-
do; consecuencia en parte de las concesiones arrancadas al Gobierno por la ma-
sividad de las protestas.

b.- Renegociación de la deuda interna

Mientras encaraba el proceso de renegociación de la deuda externa, el minis-
tro Cáceres trabajó el diseño de un mecanismo que, sin vulnerar los acuerdos sus-
critos con el FMI, significara algún alivio para la carga financiera de los sec-
tores productivos. En líneas gruesas se dispuso entonces que las instituciones fi-
nancieras podrían vender —con pacto de retrocompra a diez años—, y al Banco Cen-
tral, la proporción de su cartera de colocaciones definitivamente "mala". El ali-
vio contable que la medida supuso para la banca comercial fue reforzado, por el
Banco Central, con la apertura de nuevas líneas de crédito especial, destinadas
a los usuarios de la banca.

En definitiva el sistema funcionó sólo parcialmente. Dotados de un mayor es-
pacio para negociar, y contando con nuevos recursos, los bancos podían difundir
cierta impresión de alivio financiero para las endeudadas unidades productivas.
Aunque el número de quiebras disminuyó en 1983, los empresarios desdeñaron el sis-
tema como "insuficiente".

c.- Recuperación sin inflación

A mediados de 1983, y en combinación con la escasez de divisas y el incremento del desempleo, la masividad de la protesta civil con expresión "extra-institucional" planteó a la autoridad el desafío de reactivar la economía como un requisito de supervivencia política. En el marco del respeto a los compromisos suscritos con el FMI y la banca acreedora, la tarea era difícil. Adicionalmente era preciso impedir un rebrote inflacionario puesto que, en la óptica "Chicago", la inflación erosiona más rápidamente que el desempleo en gran escala la base de sustentación de un Gobierno.

Inicialmente, el esfuerzo de reactivación fue confiado al "beneficioso" impacto que la devaluación del peso debería impulsar, en términos de un cambio en la relación de precios entre ^{bienes} transables y no transables. En teoría, se pensó, el esfuerzo de sustituir importaciones y los nuevos incentivos a la exportación operarían como un motor de arrastre para los restantes sectores de la economía, liberados en parte del excesivo peso de su carga financiera.

Simultáneamente el Gobierno decidió incentivar la absorción de desempleo, a través --primero-- de subsidios especiales a las empresas que aumentaran su dotación de trabajadores, y por la vía --luego-- de sus propios programas de sub-ocupación.

En función de ahorrar divisas por concepto de importación de alimentos, la agricultura fue reforzada con la creación de poderes compradores estatales --para el trigo, el arroz y el maíz--, y con la reapertura de un conjunto de plantas azucareras originalmente estatales, pero luego privadas, que habían cerrado sus puertas... Finalmente, las empresas estatales recibieron instrucciones de privilegiar --a igual condición de precio y calidad-- sus adquisiciones a productores del país.

Aunque el sentido combinado de todas estas disposiciones de política económica expresaba una "vocación" claramente reactivadora --aunque tardía--, las

antecedentes.

El PCB, en continuo deterioro desde mediados de 1981, detuvo su inflexión de caída libre y, según cifras provisionales del Banco Central, se está recuperando paulatinamente desde hace tres trimestres. Desde agosto, y luego de haber alcanzado la cifra récord de un 33 por ciento de la fuerza de trabajo, el desempleo real ha comenzado también a descender, hasta niveles de un 25 por ciento...

Los registros sectoriales se orientan ahora positivamente. El índice desestacionalizado de la producción industrial ha repuntado sostenidamente desde el segundo trimestre de 1983, y el consumo de energía eléctrica se ha incrementado ostensiblemente. La minería y la agricultura, favorecidas con incentivos específicos, también se recuperan...

Las unidades productivas han mejorado sus utilidades, y un reciente informe de la Bolsa de Comercio sostiene que las sociedades anónimas que computaron pérdidas en 1983 corresponden a la mitad de las que lo hicieron en 1982. La situación de la banca es asimismo más sana, de acuerdo a las versiones de diversas autoridades.

El alivio gradual de la actividad interna ha sido acompañado de un incremento en las reservas internacionales del país. A pesar de la caída persistente en la cotización internacional del cobre, principal producto de exportación, ~~del país,~~ las reservas aumentaron en cerca de 600 millones de dólares durante los últimos tres trimestres. El aumento consiguiente en la liquidez no desató presiones inflacionarias, y el país cerró el año '83 con niveles de un 20 por ciento anual; cifra bastante moderada en relación a los rangos históricos.

Como contrapartida, el "reordenamiento" económico y financiero impulsado por Cáceres tradujo un alto costo para los trabajadores. Según datos oficiales, las remuneraciones reales cayeron en un 12,9 por ciento en 1982, y en un 4,1 por ciento adicional en 1983. Al fenómeno del deterioro los trabajadores han opuesto un mayor nivel de organización, y una radicalización de antagonismo contra el régimen.

La demanda agregada interna continúa deprimida, lo que dificulta el desarrollo de las actividades no transables, y de aquellas orientadas prioritariamente hacia la satisfacción de las necesidades del mercado doméstico. Particularmente afectados, los sectores del comercio y del transporte están siendo empujados hacia una creciente oposición...

No obstante las tensiones aún no resueltas en el plano económico, la gestión anual de Cáceres fue bien calificada por el FMI y por la banca acreedora externa, entidades que no pusieron objeción a las intenciones del ministro en orden a ejecutar un plan de actividad más expansivo en 1984. Gestionado en tiempo récord, el nuevo acuerdo para el año contemplaba una ampliación a un 4,6 por ciento en el déficit fiscal, una inflación no superior al 20 por ciento, una expansión de un 25 por ciento en el crédito interno, un superávit comercial de 1.000 millones de dólares y un nivel de reservas de 2.000 millones de dólares, siempre y cuando el cobre alcanzara una cotización promedio de 75 centavos de dólar por libra en el año.

En teoría, el plan traduciría un mayor alivio para los agentes económicos endeudados, mientras la disminución del desempleo continuaba ligada a un sacrificio adicional del poder adquisitivo de las remuneraciones del sector asalariado.

4.- El último cambio

A despecho de sus propias declaraciones, en el sentido de que "Cáceres llegaría hasta el final", Pinochet lo despidió a finales de marzo pasado. La decisión coincidió en el tiempo con la mayor de las protestas de oposición al régimen que se haya realizado hasta el momento, y... con la explicitación de un decidido apoyo de la "gran empresa" al desempeño del equipo expulsado.

La carencia de explicaciones oficiales para el "inesperado ajuste de Gabinete" no indica que no haya razones...

El primer antecedente es de carácter interno, y dice relación con la situación política. La expulsión de Cáceres habría señalado el triunfo de la percepción política del ministro del Interior, Sergio Onofre Jarpa, en el sentido de que

"sin una acelerada recuperación de la economía, el Gobierno no podrá reconstruir su primitiva base de sustentación civil". Postergado por la desmovilización opo- sitora que siguió al inicio y la inmediata ruptura del Diálogo político —en sep- tiembre de 1983—, ese argumento habría recuperado toda su fuerza tras la protes- ta del pasado 27 de marzo, transformada casi en un paro por la masiva adhesión de los comerciantes y de los transportistas.

El segundo antecedente es de carácter externo. Solitaria al extremo, la pos- tura de "renegociación individual", defendida por Cáceres en una reciente confe- rencia sobre endeudamiento externo —convocada por el BID, en Montevideo—, ha- bría subrayado el aislamiento internacional que afecta desde siempre al régimen, "sin reportar nada a cambio". En contraste, la solidaridad continental desperta- da por la línea dura de la Argentina democrática habría probado que es posible negociar, de algún modo en conjunto y en mejores condiciones, los compromisos externos del país...

La salida de Cáceres operó como un factor de "desaliento y preocupación" en- tre los grandes empresarios. Aunque ~~Cáceres~~ no había resuelto los problemas del excesivo desempleo, el alto endeudamiento de las unidades productivas, la crisis de propiedad de los grandes conglomerados privados y las prohibitivas tasas de un 25 por ciento de interés real al crédito productivo, su percepción indicaba que "cualquier cambio de autoridades económicas funcionaría como un factor per- turbador en la incipiente recuperación de la actividad económica".

El cambio se produjo igual. La designación de Modesto Collados en la cartera de Economía, y de Luis Escobar Cerda en la de Hacienda, expresó la voluntad de hacer un verdadero giro. Siendo de la confianza de Jarpa, ambos ministros están cerrando por ahora un ciclo de cinco ministerios, que ha conducido al país desde la ultraliberal ortodoxia de Chicago a un insinuado keynesianismo conservador.

5.- Las tareas del equipo

Aunque en último término la justificación del cambio es "política", los mi- nistros Collados y Escobar intentarán, en el área económica, "mantener, y en lo

posible acentuar" las tendencias positivas que los diversos indicadores vienen exhibiendo desde mediados de 1983. En esta línea, el ministro Escobar ha declarado que a su juicio, "y sin romper los compromisos contraídos con el FMI y la banca acreedora", el país dispone de recursos como para asegurar una tasa de crecimiento muy superior al 4 por ciento en el producto de este año. Acorde con esa percepción, las nuevas autoridades habrían obtenido ya una ampliación de un 0,8 por ciento en el déficit fiscal originalmente negociado por el ex ministro Cáceres. Esa disposición desconcertó —y finalmente satisfizo— a la banca acreedora, que inicialmente temió una "ruptura del acuerdo con el FMI".

Pese a que el nuevo equipo no ha explicitado su plan de acción, sus principales objetivos han sido adelantados de manera dispersa. Según ellos, el país debería crecer a una tasa bastante superior a un 4 por ciento este año; el problema de la banca intervenida sería resuelto totalmente a la brevedad, y el empleo productivo aumentará hasta reducir la tasa de desocupación a un 4 por ciento en tres años.

La gran empresa recibió el cambio con inquietud. Pero, la calidad de empresario de Modesto Collados y el reputado "equilibrio" de Escobar, en combinación con la fidelidad prometida a los fundamentos del esquema económico imperante ("social de mercado", según algunos), han disipado los principales temores.

Los medianos y pequeños empresarios, por su parte, vislumbraron el cambio como una respuesta sustancial a sus demandas por un giro dramático en la conducción económica. El nuevo gabinete representa un "esfuerzo concreto" por resolver sus problemas, luego de que el Gobierno privilegió, hasta ahora, "discriminatoriamente", la atención a las dificultades de la gran empresa y de la banca. En razón de esta hipótesis, las expectativas de este sector han cambiado sustancialmente, y sus demandas al Gobierno se han incrementado.

Los trabajadores, en contraste, piensan que "el cambio es para que nada cambie", y mantienen su escepticismo frente a una autoridad que, "en razón de sus lazos con la gran empresa y el sistema financiero", no sirve sino para

perpetuar la experiencia militar.

Finalmente, el cambio ha infundido alguna confianza a los inversionistas; un sector que todavía duda de la destreza política de Pinochet para restaurar la primitiva solidez de su régimen.

En función de ese "estado de cosas", el equipo Collados/Escobar enfrenta una serie de limitaciones en su campo de maniobra.

a.- El frente externo

Según algunos reputados especialistas locales, la indiscriminada apertura de la economía chilena al exterior determinó, en los años de la bonanza, un "cambio estructural" del aparato productivo interno, cuya dependencia de los insumos importados se acrecentó notablemente en relación a los patrones históricos. En esa perspectiva, un proceso de reactivación mayor al inicialmente proyectado puede poner en peligro la meta convenida para el superávit comercial del año, sobre todo porque el país no está en condiciones de acelerar la expansión de sus exportaciones. Como refuerzo "negativo" persiste el hecho de que, en razón de la crisis interna, los stocks de recursos importados se han reducido al mínimo.

Un segundo factor exógeno que juega en contra del país es el comportamiento ascendente de las tasas internacionales de interés. Cada punto de alza demanda al país unos 180 millones de dólares anuales para el sólo pago de los intereses de la deuda externa. La cifra equivale a 7 puntos de alza en la cotización promedio anual del cobre.

Un tercer factor de trascendencia es, por último, el proceso de renegociación de la deuda externa de 1985, que deberá iniciarse --no se sabe en qué términos-- durante el segundo semestre de este año.

Cada uno de esos frentes permite vaticinar una creciente escasez de divisas, y un uso cada vez más restrictivo de los pocos recursos disponibles. El fenómeno podría dar lugar a un virtual cierre de fronteras, a través de la imposición de aranceles definitivamente más proteccionistas.

No se descarta, para el corto plazo, la posibilidad de una nueva devaluación del peso que, junto con "garantizar" la obtención del proyectado superávit comercial, desataría probablemente perturbadoras presiones de "inflación por costos".

b.- Las restricciones del sistema bancario

La comprometida posición del sistema financiero doméstico, y la objetiva escasez de recursos para prestar, están conspirando para que el spread de intermediación encarezca prohibitivamente los intereses de colocación... dificultando la recuperación productiva. El fenómeno tiene también una explicación política: fuertemente endeudada con el Banco Central, y a pesar de que dispone de una década para recomprar su "cartera vendida", la banca privada está intentando acelerar su capitalización con el objeto de "desendeudarse" antes de 1989; año para el que se proyecta institucionalmente un cambio de Gobierno...

Actúa en refuerzo de este fenómeno la restricción comprometida para la expansión del crédito interno con el FMI.

No obstante, existe una comisión que está estudiando alguna "salida global" al problema del endeudamiento interno, y al colindante de la banca intervenida.

c.- La inflación comprimida

Se estima que, cualquiera sea su magnitud, un incremento del PGB requerirá una expansión correlativa de la demanda interna. Es posible que ese fenómeno estimule alzas de precios, especialmente en los sectores de la actividad que no han sido todavía beneficiados con medidas reactivadoras específicas. La fuerte restricción de la demanda interna ha postergado la validación de algunas presiones alcistas, hecho que queda en evidencia si se considera que, a partir de junio de 1982, el peso se ha devaluado en un 128 por ciento mientras la inflación ha rebotado sólo en un 53 por ciento.

d.- El deterioro del aparato productivo

Según los especialistas, el nuevo modo de integración de la economía local a la mundial definido por la apertura indiscriminada de los años recientes, determinó la "desintegración" del aparato productivo interno. La situación empeoró